

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES A QUE HUBIERE LUGAR, FORMULADAS POR JAIME FRANCISCO FONSECA DÍAZ, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ESPECIAL IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE PSE-QUEJA-137/2021.

RESULTANDOS:

1. Presentación del escrito de denuncia. El veintiuno de abril del año dos mil veintiuno,¹ se presentó en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco², el escrito signado por **Jaime Francisco Fonseca Díaz**, en el que se denuncian hechos que considera violatorios de la normatividad electoral vigente en el estado de Jalisco, los cuales atribuye al **C. Aarón César Buenrostro Contreras**, en su carácter de candidato a la presidencia del municipio de Tala, Jalisco.

2. Acuerdo de radicación y requerimiento. El veintidós de abril, la Secretaría Ejecutiva³ del Instituto dictó acuerdo en el que radicó el escrito de denuncia con el número de expediente **PSE-QUEJA-137/2021** y requirió al denunciante para que ratificara su escrito de queja.

3. Ratificación. El veinticinco de abril, acudió a las instalaciones de este Instituto el ciudadano **Jaime Francisco Fonseca Díaz** a ratificar el contenido de su escrito de queja.

4. Acuerdo de requerimiento. Mediante acuerdo con data veintiséis de abril, la Secretaría Ejecutiva, previo a resolver sobre la ampliación del término para emitir el acuerdo de admisión o desechamiento de la queja, se previno al promovente para que proporcionará el domicilio donde habría de llevarse a cabo el emplazamiento del denunciado.

5. Acuerdo ampliando término, requerimiento y ordena práctica de diligencias. El 30 treinta de abril, la Secretaría del Instituto dictó acuerdo mediante el cual se tuvo al denunciado dando cumplimiento a la prevención que

¹ Todas las fechas se refieren al año dos mil veintiuno, salvo señalamiento en particular.

² En lo sucesivo, el Instituto.

³ En lo sucesivo, la Secretaría

le fue realizada mediante el acuerdo reseñado en el punto que antecede, de igual forma, determinó ampliar el plazo para resolver sobre la admisión o desechamiento de la denuncia; además, ordenó la realización de diligencias de verificación sobre la existencia y contenido las publicaciones objeto de denuncia.

6. Acta circunstanciada. El tres de mayo, se elaboró el acta circunstanciada mediante la cual personal de la Oficialía Electoral debidamente investido de fe pública electoral y legalmente facultado para el ejercicio de dicha función, verificó la existencia y contenido de las publicaciones referida en el escrito de denuncia.

7. Acuerdo de admisión a trámite. El cuatro de mayo, la autoridad instructora dictó el acuerdo en el que tuvo al denunciado dando cumplimiento al requerimiento formulado, además se admitió a trámite la denuncia formulada.

8. Proyecto de medida cautelar y remisión de constancias. Mediante memorándum 138/2021 notificado el 07 de mayo, la Secretaría hizo del conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto el contenido de los acuerdos citados en el resultando que antecede y remitió vía electrónica las constancias que integran el expediente relativo al procedimiento administrativo sancionador especial identificado con el número de expediente PSE-QUEJA-137/2021 a efecto de que ese órgano colegiado determinara lo conducente sobre la adopción de las medidas solicitadas por las denunciantes.

CONSIDERANDO:

I. Competencia. La Comisión de Quejas y Denuncias es el órgano técnico del Instituto, competente para determinar lo conducente respecto a la adopción de medidas cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores, en términos de lo dispuesto por los artículos 469, párrafo 4; 472, párrafo 9 del Código Electoral del Estado de Jalisco; 45, párrafo 1, fracción III del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; 1 y 10, párrafos 3, 4 y 5 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

II. Hechos denunciados. Del contenido de la denuncia formulada, se desprende que la parte promovente esencialmente denuncia, que el denunciado Aarón César Buenrostro Contreras, en su arranque de campaña el día 04 de abril, en su red

social Facebook realizó una publicación con diversas fotografías, en las que expone la imagen de muchos menores de edad, lo cual va en contra de la normatividad electoral vigente, con lo cual expone y vulnera los derechos de éstos, al no existir de manera expresa el consentimiento de los padres o tutores de los menores para que puedan ser expuestos en dicha red social; que de igual forma, en la fotografías denunciadas, se aprecia el uso de dadas por parte del denunciado, que fueron entregadas a los asistentes del evento, las cuales consisten en la utilización de alimentos, lo cual contrapone la normatividad electoral.

III. Solicitud de medida cautelar. La parte promovente solicita, que se adopten las medidas cautelares peticionadas, los cuales a continuación se transcriben:

"1. Se dicten medidas sancionadoras si así es el caso en contra del C. AARON CESAR BUENROSTRO CONTRERAS O EN CONTRA DE QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA EXPOSICIÓN DE INFANTES EN LAS IMÁGENES PUBLICADAS EN LA RED SOCIAL FACEBOOK Y QUE APARECEN LOS MENORES DE EDAD EN PLENO ACTO DE INICIO DE ARRANQUE DE CAMPAÑA

2. Si así lo determinare las acciones que se están realizando por parte del candidato a presidente municipal de Tala, Jalisco, AARON BUENROSTRO CONTRERAS, se le retire su registro como candidato a presidente municipal de Tala, Jalisco, por los actos de violación de los derechos de los menores expuestos en las imágenes y el uso indebido de dadas y especulaciones electorales, imágenes que se anexa como prueba de los hechos narrados."

IV. Pruebas ofrecidas para acreditar la existencia del material denunciado. Una vez que fue analizado íntegramente el escrito de queja, se advierte que la denunciante, ofreció como medios de prueba los siguientes:

"1. PRUEBA OFRECIDA. DOCUMENTAL PRIVADA, CONSISTE EN LA IMAGEN FOTOGRÁFICA, DONDE SE PUEDE OBSERVAR A UN GRUPO DE 90 PERSONAS, ENTRE ELLOS EL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TALA JALISCO AARON CESAR BUENROSTRO CONTRERAS, DE LOS CUALES SE APRECIA LA EXPOSICIÓN DE 16 MENORES DE EDAD, CON LA CUAL PRETENDO ACREDITAR LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE MENORES DE EDAD, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y LA UTILIZACIÓN DE ESPECULACIONES DURANTE EL ARRANQUE DE SU CAMPAÑA, HECHO CON EL CUAL PRETENDEMOS

DEMOSTRAR EL USO INDEVIDO DE LA IMAGEN Y LA INTEGRIDAD DE LOS MENORES Y LA UTILIZACIÓN DE ESPECULACIONES QUE VULNERAN EL DERECHO ELECTORAL.

2. PRUEBA OFRECIDA. DOCUMENTAL PRIVADA, CONSISTENTE EN IMAGEN FOTOGRÁFICA, DONDE SE OBSERVA AL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TALA DE NOMBRE AARON CESAR BUENROSTRO CONTRERAS, ACOMPAÑADO DE 4 PERSONAS A SUS COSTADOS, ENTRE ELLAS EN SU PARTE IZQUIERDA SE ILUSTRAN LA EXPOSICIÓN DE UNA FEMENINA MENOR DE EDAD Y A SU DERECHA EN LA PARTE INICIAL A UNA MUJER MENOR DE EDAD Y A UN VARÓN MENOR DE EDAD, CON LO CUAL PRETENDO ACREDITAR LA EXPOSICIÓN A MENORES DE EDAD, REALIZADOS POR EL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TALA JALISCO QUE DE NOMBRE QUE SE MENCIONA EN ESTE PUNTO.

3. PRUEBA OFRECIDA. DOCUMENTAL PRIVADA, CONSISTENTE EN IMAGEN FOTOGRÁFICA, DONDE SE OBSERVA DE LA PRESENCIA DE 11 PERSONAS, DE LAS CUALES 5 SON MENORES DE EDAD, HECHO CON LO CUAL PRETENDEMOS ACREDITAR, LA VIOLACIÓN A LA NORMATIVIDAD CON LA EXPOSICIÓN DE MANERA PÚBLICA DE LA IMAGEN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DURANTE EL ARRANQUE DE CAMPAÑA DEL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE TALA AARON BUENROSTRO CONTRERAS.

4. PRUEBA OFRECIDA. DOCUMENTAL PRIVADA. CONSISTENTE EN IMAGEN FOTOGRÁFICA, DONDE SE OBSERVA A UN GRUPO DE 14 PERSONAS, DENTRO DE LAS CUALES 2 DE ELLAS, FEMENINAS SON MENORES DE EDAD, DICHA FOTOGRAFÍA PUBLICADA EN LA CUENTA OFICIAL DE FACEBOOK DEL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA AARON BUENROSTRO CONTRERAS EL DÍA DE EN EL CUAL SE DIERON POR INICIADAS OFICIALMENTE LAS CAMPANAS, HECHO CON EL CUAL PRETENDEMOS DEMOSTRAR LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

5. PRUEBA OFRECIDA. DOCUMENTAL PRIVADA. CONSISTE EN LA IMAGEN FOTOGRÁFICA, DONDE SE OBSERVA LA PRESENCIA DE 7 PERSONAS DE AMBOS SEXOS. EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA PRESENCIA DE UNA MENOR DE EDAD, HECHO CON EL CUAL PRETENDEMOS DEMOSTRAR LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES, SIN CONSENTIMIENTO EXPRESO ALGUNO DE LOS PROGENITORES, POR PARTE DEL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TALA JALISCO, AARON CESAR BUENROSTRO CONTRERAS.

6. PRUEBA OFRECIDA. DOCUMENTAL PRIVADA. CONSISTE EN LA IMAGEN FOTOGRÁFICA, PUBLICADA EL DÍA PASADO 4 DE ABRIL DEL

PRESENTE AÑO, DURANTE EL INICIO DE CAMPAÑA DEL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TALA JALISCO, AARON CESAR BUENROSTRO CONTRERAS, DONDE SE OBSERVA LA PRESENCIA DE 12 PERSONAS, ENTRE ELLAS 2 MENORES DE EDAD DE SEXO FEMENINO, HECHO CON EL CUAL PRETENDEMOS DEMOSTRAR LA VULNERACIÓN DE SU DERECHO HUMANO A UNA IMAGEN INTEGRAL QUE SE CONSAGRA EN LAS LEGISLACIONES APLICABLES A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y QUE CONTRAVIENEN A LA NORMATIVIDAD EN RELACIÓN A LA PROPAGANDA ELECTORAL.

7. PRUEBA OFRECIDA. DOCUMENTAL PRIVADA. CONSISTE EN LA IMAGEN FOTOGRÁFICA, DONDE SE OBSERVA EN LA PARTE IZQUIERDA AL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TALA JALISCO AARON CESAR BUENROSTRO CONTRERAS, Y EN LA PARTE DERECHA A UN GRUPO DE PERSONAS EN LAS CUALES PODEMOS ENCONTRAR LA PRESENCIA DE 8 PERSONAS MENORES TANTO FEMENINO COMO MASCULINO Y EL USO DE ESPECULACIONES CON FINES DE PROPAGANDA A SU FAVOR HECHO CON EL CUAL PRETENDEMOS DEMOSTRAR LA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE LA IMAGEN DE MENORES DE EDAD PARA PROPAGANDA CON FINES POLÍTICOS.

8. PRUEBA OFRECIDA. DOCUMENTAL PRIVADA. CONSISTENTE EN UNA IMAGEN FOTOGRÁFICA, DONDE SE ILUSTRAN UN GRUPO DE PERSONAS COMIENDO, QUE ASISTIERON AL INICIO DE CAMPAÑA DEL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TALA JALISCO AARON CESAR BUENROSTRO CONTRERAS, ASÍ COMO TAMBIÉN UNA OLLA CON COMIDA, HECHO CON EL CUAL NUESTRA PRETENSIÓN ES DEMOSTRAR DADIVA ELECTORAL, DICHA ACCIÓN QUE VA EN CONTRA DE LA REGLAMENTACIÓN ELECTORAL.

9. PRUEBA OFRECIDA. DOCUMENTAL PRIVADA. CONSISTE EN UNA IMAGEN FOTOGRÁFICA. DURANTE EL INICIO DE CAMPAÑA A LA PRESIDENCIA DE TALA JALISCO POR PARTE DE AARON CESAR BUENROSTRO CONTRERAS, SE OBSERVA EL USO DE COMIDA PARA LOS PRESENTES AL EVENTO, HECHO EN EL CUAL NUESTRA PRETENSIÓN ES DEMOSTRAR DADIVAS CON FINES ELECTORALES, QUE CONTRAVIENEN AL DERECHO.”

V. DILIGENCIAS ORDENADAS POR ESTA AUTORIDAD.

Es preciso establecer que esta autoridad integradora, ordenó realizar como diligencia de investigación la verificación de la existencia y contenido de la publicación precisada por el denunciante en su escrito inicial, misma que se llevó a cabo el día tres de mayo, la cual consta en el acta de la función de Oficialía Electoral número IEPC-OE/148/2021.

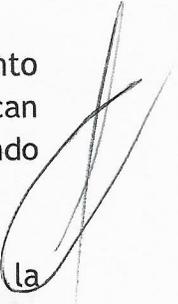
Dicha acta constituye una prueba documental pública que de conformidad al párrafo 2 del artículo 463 del código en la materia, misma que merece valor probatorio pleno.

VI. Naturaleza y finalidad de las medidas cautelares.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 472, párrafo 9, del Código; y 10, del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto; las medidas cautelares constituyen instrumentos que puede decretar la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento. 

Por tanto, se trata de resoluciones que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo; y, sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves y su finalidad es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así como evitar que el perjuicio se vuelva irreparable, asegurando la eficacia de la resolución que se dicte. 

En consecuencia, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar la existencia y el restablecimiento del derecho que se considera afectado, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo.

Bajo esa lógica, las medidas cautelares a la vez que constituyen un instrumento de otra resolución, también sirven para tutelar el interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente, una situación que se califica como ilícita. 

Ello, con la finalidad, como ya se apuntó con anterioridad, de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios rectores de la materia electoral o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la legislación electoral aplicable. 

Ahora bien, para que en el dictado de las medidas cautelares se cumpla el principio de legalidad, la fundamentación y motivación deberá ocuparse cuando menos, de los aspectos siguientes:

- a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso, y,
- b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico, cuya restitución se reclama (*periculum in mora*).

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida -que se busca evitar sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el procedimiento o proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización.

Atendiendo a esa lógica, el dictado de las medidas cautelares se debe ajustar a los criterios que la doctrina denomina como *fumus boni iuris* -apariencia del buen derecho- unida al *periculum in mora* -peligro en la demora- de que mientras llega la tutela efectiva se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final-.

Sobre el *fumus boni iuris* o apariencia del buen derecho, se debe precisar que éste apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable. Por su parte, el *periculum in mora* o peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.

Como se puede deducir, la verificación de ambos requisitos obliga indefectiblemente a que la autoridad responsable realice una evaluación preliminar del caso concreto en torno a las respectivas posiciones enfrentadas, a fin de determinar si se justifica o no el dictado de las medidas cautelares.

En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia de un derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien sufre la lesión o el riesgo de un daño inminente y la correlativa falta de justificación de la conducta reprochada,

entonces se torna patente que la medida cautelar debe ser acordada, salvo que el perjuicio al interés social o al orden público sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, supuesto en el cual, deberá negarse la medida cautelar.

Como se puede observar de todo lo anteriormente explicado, es inconcuso entonces que la ponderación de los valores tutelados que justifican los posicionamientos de las partes en conflicto, así como la valoración de los elementos probatorios que obren en el expediente, se convierte en una etapa fundamental para el examen de la solicitud de medidas cautelares, toda vez que cuando menos se deberán observar las directrices siguientes:

- a) Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende.
- b) Justificar el temor fundado de que, ante la espera del dictado de la resolución definitiva, desaparezca la materia de controversia.
- c) Ponderar los valores y bienes jurídicos en conflicto, y justificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la determinación que se adopte.
- d) Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al contexto en que se produce, trasciende o no a los límites del derecho o libertad que se considera afectado y, si presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito.

De esa forma, la medida cautelar en materia electoral cumplirá sus objetivos fundamentales: evitar la vulneración de los bienes jurídicos tutelados, así como la generación de daños irreversibles a los posibles afectados. Todo ello para que cuando se dicte la resolución de fondo, sea factible su cumplimiento efectivo e integral.

VII. Pronunciamiento respecto de la solicitud de adopción de la medida cautelar.

Precisado lo anterior y considerado en su integridad el escrito de queja y las pruebas que obran en el expediente, se analiza la pretensión, hecha valer por la parte denunciante.

Ahora bien, respecto de la primera y segunda solicitud realizadas por el denunciante, consistentes en el dictado de las medidas sancionadoras en contra del denunciado, así como el retiro de su registro como candidato a la presidencia

municipal de Tala, Jalisco, la mismas resultan improcedentes, en virtud de que dichas solicitudes, se encuentran fuera del objeto que constituye a las medidas cautelares, el cual, como ya se estipuló en el considerando VI de la presente resolución, es el de conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, cuyas características son el de ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo; y, sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves, cuya finalidad es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva así como evitar que el perjuicio se vuelva irreparable, asegurando la eficacia de la resolución que se dicte.

Toda vez que, de conformidad con el arábigo 458 del Código Electoral de la entidad, a las peticiones realizadas por la parte denunciante, les reviste el carácter de **Sanciones**, las cuales podrán decretarse, de así considerarlo pertinente el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, al momento de resolver la presente queja, por tratarse de la autoridad resolutora, y no por este Instituto, ya que el carácter que tiene dentro de los Procedimientos Sancionadores Especiales, como lo es la queja en que se actúa, es de instructora del procedimiento.

Sin embargo, en virtud de que el promovente denuncia la exposición de la imagen de menores así como que, del acta de la Oficialía Electoral que obra agregada al expediente se advierte que en las imágenes que aparecen en la publicación objeto de denuncia, aparecen niñas, niños y adolescentes, situación que esta Comisión no puede pasar por alto y de manera excepcional, en el caso bajo estudio y con la única finalidad de salvaguardar los derechos de los menores que ahí aparecen, se avocará a realizar el estudio de vulneración a las reglas de propaganda por el uso de imágenes de menores de edad.

Ya que, conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el sumario, se desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la materia de la queja.

Sentado lo anterior, desde una perspectiva preliminar, en aras de preservar, velar y hacer efectiva la tutela, por parte de esta Comisión, del interés superior de la niñez, se considera oportuno, justificado e idóneo el dictado de medidas

cautelares a fin de prevenir daños irreparables a la equidad de la contienda electoral. En ese sentido, se procederá al análisis de los hechos denunciados.

Actos que contravienen las reglas sobre propaganda político electoral respecto a la violación del interés superior de la niñez como derecho humano.

En primer término, es necesario establecer el marco jurídico aplicable al caso y, de manera destacada, los criterios jurisdiccionales para efectos de determinar si está o no en presencia de la violación denunciada.

A) Interés superior de la niñez

Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida por los partidos políticos está amparado por la libertad de expresión, que incluso debe maximizarse en el contexto del debate político, pero ello no implica que dicha libertad sea absoluta, dado que tiene límites vinculados con la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, incluyendo, por supuesto los derechos de las niñas, niños y adolescentes, acorde con lo dispuesto en los artículos 4° y 6° párrafo primero, de la Constitución Federal.

Bajo ese contexto, de manera particular, el artículo 3, párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se deberá atender como consideración primordial el interés superior de la niñez.

A este respecto, es trascendental la interpretación que en torno a dicho precepto realizó el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su Observación General 14 de 2013, en la que sostuvo que el concepto del interés superior de la niñez implica tres vertientes:

- **Un derecho sustantivo:** Que consiste en el derecho del niño a que su interés superior sea valorado y considerado de fundamental protección cuando diversos intereses estén involucrados, con el objeto de alcanzar una decisión sobre la cuestión en juego. Es un derecho de aplicación inmediata.

- **Un principio fundamental de interpretación legal:** Que significa que si una previsión legal está abierta a más de una interpretación, debe optarse por aquélla que ofrezca una protección más efectiva al interés superior del niño.
- **Una regla procesal:** Cuando se emita una decisión que podría afectar a un niño específico o en general a un grupo identificable o no identificable de niños, el proceso para la toma de decisión debe incluir una evaluación del posible impacto (positivo o negativo) de la decisión sobre el niño involucrado.

Asimismo, en dicha observación se señala al interés superior de la niñez como un concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto, cuyo objetivo es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño y su desarrollo holístico, por lo que “ningún derecho debería verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del niño”.

En ese sentido, se señala que el propósito principal de dicho documento interpretativo es, “promover un verdadero cambio de actitud que favorezca el pleno respeto de los niños como titulares de derechos”, lo que se precisa deberá repercutir, entre otros ámbitos, en “las decisiones individuales tomadas por autoridades judiciales o administrativas o por entidades públicas a través de sus agentes que afectan a uno o varios niños en concreto”.

De igual forma precisa que, aun y cuando el niño sea muy pequeño o se encuentre en una situación vulnerable, tal circunstancia no le priva del derecho a expresar su opinión, ni reduce la importancia que debe concederse a sus opiniones al determinar el interés superior del menor (párrafo 54 de dicha Observación General).

Por su parte, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Al respecto, en el ejercicio de su función consultiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el contenido y alcance de dichas disposiciones convencionales, precisando lo siguiente:

“1. Que de conformidad con la normativa contemporánea del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la cual se enmarca el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los niños son titulares de derechos y no sólo objeto de protección.

2. Que la expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.”⁴

Principio que a su vez, es recogido por el párrafo 9 del artículo 4 de la Constitución Federal, y por los artículos 2, fracción III, 6, fracción I y 18 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen como obligación primordial de todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, tomar en cuenta el interés superior de la niñez, mismo que deberá prevalecer en todas aquellas decisiones que involucren a niñas, niños y adolescentes, incluso cuando se presenten diferentes interpretaciones, en la que se elegirá la que lo satisfaga de manera más efectiva (principio pro infante).

De esa manera, en la jurisprudencia de nuestro alto Tribunal el interés superior de la niñez es un concepto complejo, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento, lo que exige que cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser la consideración primordial, lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas⁵

⁴ Véanse los puntos 1 y 2 de las conclusiones que conforman la Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”. Visible en http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf, página 86.

⁵ Consúltese la tesis aislada de la Segunda Sala de rubro: **DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE.** 2a. CXLI/2016, Décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el seis de enero de dos mil dieciséis. Los criterios que aquí se citan de la Suprema Corte pueden consultarse en www.scjn.gob.mx.

En este mismo sentido, la Suprema Corte⁶ ha establecido como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés superior de la niñez, entre otros aspectos, el que se atiendan sus deseos, sentimientos y opiniones, siempre que sean compatibles con sus necesidades vitales y deben ser interpretados de acuerdo con su madurez o discernimiento.

Por otra parte, mediante acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con la clave **INE/CG481/2019**, por el que se modifican los Lineamientos y anexos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de Propaganda y Mensajes Electorales, y se aprueba el manual respectivo, en acatamiento a las sentencias SRE-PSD20/2019 y SRE-PSD-21/2019 de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo de observancia obligatoria para los partidos políticos, coaliciones, candidatos/candidatas de coalición y candidatos/as independientes federales y locales, así como para las autoridades federales y locales.

Dichos lineamientos, en su artículo 5 señalan que las niñas, niños y adolescentes pueden aparecer de manera directa e incidental en la propaganda político-electoral, entendiéndose como aparición incidental cuando la imagen o dato que haga identificable al menor aparece de manera referencial, y será directa cuando la imagen del menor forma parte central de la referida propaganda.

⁶ **Jurisprudencia 1ª./J 44/2014 (10ª)**, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: **INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS**. Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Pág. 270. Asimismo, como consecuencia de este criterio, se emitió otro en donde se sostuvo que “el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, c) como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. Asimismo, la justificación de la medida adoptada deberá dejar patente que se consideró el interés superior del menor en el análisis de las diversas alternativas posibles”. Tesis: 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro **“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO”**.

Por su parte, el punto 8 de los multicitados lineamientos establece que el consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o la o el adolescente que aparezca en la propaganda político-electoral o mensajes mediante su imagen, voz o cualquier otro dato que lo haga identificable, de manera directa o incidental, deberá ser por escrito, informado e individual y deberá satisfacer los requisitos que en dicho punto se especifican.

En adición a lo anterior, el punto 9 de los lineamientos en comento establece que los sujetos obligados deberán recabar la opinión de las niñas y los niños entre los 6 los 17 años de edad sobre su participación en propaganda político-electoral o mensajes de las autoridades electorales. Dicha opinión deberá ser propia, informada, individual, libre, expresa y recabada conforme al formato que proporcionará la autoridad electoral.

Asimismo, el artículo 15 de los referidos lineamientos, señala que cuando la aparición del menor sea incidental y ante la falta de consentimientos, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocibles la imagen, voz o cualquier otro dato que haga identificable al sujeto de protección, con el fin de maximizar su dignidad y derechos.

B) Caso concreto

Del acta número IEPC-OE-148/2021 de fecha 03 tres de mayo, levantada en función de la Oficialía Electoral, a la cual, de conformidad con el numeral 519 párrafo 1 inciso II del Código Electoral del Estado de Jalisco, le reviste el carácter de documental pública, así como que, tiene valor probatorio pleno, acorde al arábigo 463 párrafo 2 del citado cuerpo de leyes, se advierte que, en la publicación realizada en la red social Facebook por el perfil a nombre de Aarón Buenrostro Contreras el pasado cuatro de abril objeto de denuncia, de las imágenes que conforman dicha publicidad, se visualiza al denunciado así como la presencia de niñas, niños y adolescentes, tal y como se advierte de la siguiente relación:

Publicación de fecha 04 de abril del año 2021

Link:

<https://www.facebook.com/aaron.buenrostrocontreras>

Total de imágenes: 30

imágenes en que aparecen menores de edad: 09



[Handwritten signatures and scribbles in blue and black ink on the right side of the page.]



Se precisa, que en aras de maximizar la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes que aparecen en las fotografías que conforman la publicación realizada por el denunciado en la red social Facebook, antes señaladas, mismas que se analizan en esta resolución, se difuminó sus rostros, evitando de esta forma un perjuicio al interés superior de la niñez.

Ahora bien del análisis de las imágenes objeto de estudio, se advierte que las mismas, se tratan de actos de campaña realizados por el denunciado, los cuales acorde a lo dispuesto por el punto 1, 2 y 3 de los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, cuando aparezcan estos deberán de observarse las disposiciones establecidas en dichos lineamientos para su aparición entre otros, en actos de campaña, como en el caso concreto.

De igual forma, de las imágenes señaladas en la tabla anterior, esta Comisión advierte que en la totalidad de las mismas, existen varias niñas, niños y adolescentes que aparecen de manera directa en diversas publicaciones, en términos de lo establecido en el punto 5 de los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral.

Asimismo, se advierte que en el contexto en el que se muestran, no induce o incita a la violencia, al conflicto, al odio, a las adicciones, a la vulneración física o mental, a la discriminación, a la humillación, a la intolerancia, al acoso escolar o bullying, al uso de la sexualidad como una herramienta de persuasión para atraer el interés del receptor, o cualquier otra forma de afectación a la intimidad, la honra y la reputación de los menores de edad, dispuesto en el punto siete de los citados lineamientos.

De igual forma, esta Comisión advierte que, acorde al criterio establecido en el punto cinco de los lineamientos citados⁷, del contenido de las imágenes referidas en el cuadro que antecede, aparecen de forma incidental varias niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, cabe señalar que el punto 15 de los citados lineamientos, establece que cuando la aparición de las niñas, niños y adolescentes sea incidental y no se cuenta con los consentimientos respectivos, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocibles la imagen, voz o cualquier otro dato que haga identificable al sujeto de protección, con el fin de maximizar su dignidad y derechos.

Ahora bien, de las actuaciones que integran el presente sumario, no se advierte que el denunciado Aarón Cesar Buenrostro Contreras, cuente con los consentimientos de los padres o tutores de las niñas, niños y adolescentes que aparecen de forma directa e incidental en las imágenes objeto de análisis, en consecuencia de lo anterior, esta Comisión considerada, que desde una óptica preliminar y en apariencia del buen derecho, que el contenido de la publicaciones analizadas puede contravenir las reglas sobre propaganda político electoral, por lo que las integrantes de esta Comisión con la finalidad de evitar la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y velando todo momento por el interés superior de la niñez como derecho humano, considera necesario hacer que cese la conducta presumiblemente infractora en tanto sea dictada una resolución de fondo en el presente asunto.

⁷ 5. La aparición de niñas, niños o adolescentes es directa en propaganda político-electoral y mensajes electorales; e indirecta o incidental en actos políticos, actos de precampaña o campaña. En un acto político, un acto precampaña o campaña, la aparición es incidental, siempre y cuando las niñas, niños o adolescentes sean exhibidos de manera involuntaria y sin el propósito de que formen parte de éstos, por ser situaciones no planeadas o controladas por los sujetos obligados.

En consecuencia, **resulta procedente** la adopción de medidas cautelares y como consecuencia, se ordena al denunciado Aarón Cesar Buenrostro Contreras eliminar las publicaciones objeto de denuncia y estudio.

Por otro lado, respecto a la segunda de sus solicitudes consistente en determinar el retiro de la candidatura a presidente municipal de Tala, Jalisco, AARON BUENROSTRO CONTRERAS, por la vulneración de los derechos de los menores expuestos en las imágenes y el uso indebido de dádivas, debe precisarse que dicha petición escapa a la naturaleza jurídica y finalidad de las medidas cautelares; la acreditación de las infracciones precisadas y en su caso, la sanción que debe aplicarse, corresponderá a la autoridad jurisdiccional al resolver el fondo del presente asunto.

Tutela Preventiva

La medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, se concibe como una protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, considerando que existen valores, principios y derechos que requieren de una protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que para garantizar su más amplia protección las autoridades deben adoptar medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que prevengan o eviten el comportamiento lesivo.

Esto es, consiste no sólo en abstenerse de realizar una conducta o comportamiento que cause daño, sino en adoptar las medidas de precaución necesaria para que no se genere. No tienen el carácter sancionatorio porque buscan prevenir una actividad que a la postre puede resultar ilícita, por realizarse en contravención a una obligación o prohibición legalmente establecida.

Así, la tutela preventiva se entiende como un cuidado contra el peligro de práctica, de continuación o de repetición del ilícito. Previendo el peligro en la dilación, su finalidad es suplir la ausencia de una resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico

conculcado, desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica.

Por lo que, bajo la apariencia del buen derecho, resulta procedente la adopción de medida cautelares, con los siguientes

Efectos:

1. Se ordena al denunciado Aarón Cesar Buenrostro Contreras eliminar las imágenes objeto de denuncia dentro de un plazo que no podrá exceder de veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación de la presente resolución, mismas que se encuentran inmersas en el link <https://www.facebook.com/aaron.buenrostrocontreras>, en donde aparecen niñas, niños y adolescentes tanto de forma directa como indirecta. Lo que deberá informar por escrito a este Instituto dentro de un término igual después de que ello ocurra.

Apercibido que, en caso de incumplimiento, se le impondrá una amonestación pública y, de continuar la omisión, podrá ser acreedor a los medios de apremio previstos en la normativa electoral.

2. Se declara **procedente** la adopción de medidas cautelares en su modalidad de **tutela preventiva**, por lo cual se ordena al denunciado, se abstenga de realizar publicaciones fuera de los términos establecidos en los Lineamientos y anexos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales.

3. El personal de la Oficialía Electoral de este Instituto deberá elaborar una nueva acta de los sitios de internet precisados en esta resolución a fin de dar fe del cumplimiento de la presente medida decretada.

Por lo anterior, se ordena al denunciado, se abstenga de realizar publicaciones fuera de los términos establecidos en los Lineamientos y anexos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales.

Las situaciones expuestas a lo largo del presente considerando, no prejuzgan respecto de la existencia o no de las infracciones denunciadas, lo que no es

materia de la presente determinación, es decir, que, si bien en la presente resolución se ha determinado la adopción de medidas cautelares en su modalidad de tutela preventiva, la misma no prejuzga respecto de la existencia de una infracción que pudiera llegar a determinar la autoridad competente, al someter los mismos hechos a su consideración.

Por las consideraciones antes expuestas, ésta Comisión

RESUELVE:

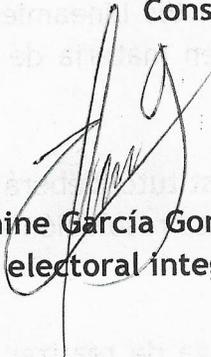
Primero. Se declaran **parcialmente procedentes** las medidas cautelares solicitadas por el denunciante por las razones expuestas en el considerando VII, con los efectos precisados.

Segundo. Túrnese a la Secretaría Ejecutiva del Instituto a fin de que notifique a las partes el contenido de la presente resolución.

Guadalajara, Jalisco, a 08 de mayo de 2021.



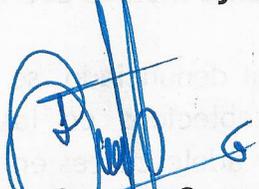
Silvia Guadalupe Bustos Vásquez
Consejera electoral presidenta



Zoad Jeanine García González
Consejera electoral integrante



Claudia Alejandra Vargas Bautista
Consejera electoral integrante



Luis Alfonso Campos Guzmán
Secretario técnico